

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo diez y ocho de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de esta Capital, por los CC. Vicente Hernandez, Matías Hernandez y Gerardo Velazquez, en representación de sus hijos, Hilario, Manuel y Cirilo de los mismos apellidos, quejándose de haber sido aprehendidos por la autoridad política de Tlalnepantla y consignados como reemplazos á la Comandancia militar del Distrito Federal, quien los mandó filiar en calidad de tales al ejército permanente, con cuyos procedimientos alegan los peticionarios haberse violado en las personas de sus representados, las garantías consignadas en los art. 4º, 5º, 14, 16, 19, 20 y 21 del Pacto fundamental de la República: vistas las constancias de autos, y considerando: que la Comandancia militar del Distrito, al consignar á los quejosos contra su voluntad al servicio de las armas, ha violado las garantías consignadas en el art. 5º de la Constitución Federal de la República, se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez 1º de Distrito de esta Capital, que manda, en nombre de los Poderes de la Union, amparar y proteger á los peticionarios, contra los procedimientos de la Comandancia militar del Distrito, á que se refiere el presente juicio.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado remitente con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos, lo decretaron los CC. Presidente y Ministros, que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos, y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Ignacio Ramí-*

rez.—*L. Velazquez.*—*José García Ramírez.*—*M. Zavala.*

Son copias que certifico. México, Mayo veintitres de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio seguido ante el Juzgado 2º de Distrito de esta Capital, por los CC. Licenciados Juan Sanchez Azcona y Gabriel M. Islas, en representación de varios CC. Diputados al Congreso de la Union, por violacion de garantías individuales.

PRELIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez:

El Promotor dice: que los CC. Diputados al Congreso de la Union Licenciados Juan Sanchez Azcona y Gabriel M. Islas, por sí y en representación de los demás CC. Diputados que se expresan en el ocaso, han interpuesto el recurso de amparo contra la determinacion de una reunion de CC. Diputados, en virtud de la cual la comision de policía del Congreso, compuesta de los CC. Diputados Ramon Guzman, Angel Lerdo de Tejada y José V. Villada, hizo efectiva una multa, con la que considerari violada en sus personas la garantía que otorga la Constitución general de la República en su art. 21. El C. Juez, conforme con las prescripciones de la ley organica de 20 de Enero de 1889 y reglamentaria de los juicios de amparo, pidió el informe respectivo á los CC. Diputados de la Comision que hicieron efectiva la multa, y al evacuarlo se limitaron á manifestar, que el acto contra el que se interpone el amparo lo ejecutaron en cumplimiento de una Orden de la Secretaría del Congreso de fecha 25 de Marzo próximo pasado; y en

vista de esa contestacion se pidió el informe conducente á esa Secretaría. Transcurrió el plazo que designa la ley sin que lo haya efectuado, y aun en el momento de estar extendiendo este pedimento no se ha recibido, de manera que el que suscribe tiene que atenerse á las aseveraciones de los CC. que se quejan contra el hecho con que se considera violada una garantía constitucional y á la contestacion de los miembros de la comision de policía del Congreso.

Aunque esos datos deben tenerse por ciertos en vista de el contenido de que esa comunicacion oficial merece la fé que le dá su caracter, y la omision de la Secretaría en evacuar el informe corrobora la idea de haber procedido por su orden, sin embargo, será necesario esclarecer algunos puntos en el término de prueba, respecto de las circunstancias en virtud de las cuales la Secretaría haya librado la repetida orden.

Entrando al punto principal sobre que versa el escrito solicitando el amparo, si se atiende á los términos textuales y rigurosos del artículo constitucional, desde luego se percibe, que no teniendo la reunion de Diputados que acordó la imposicion de la multa á los quejosos, ni el caracter judicial para imponer una pena propiamente dicha, ni el político ó administrativo, segun el espíritu que indica el artículo 21 para las penas correccionales, ha habido violacion de esa garantía aplicando una ley secundaria y muy anterior á la Constitucion, cuyas prescripciones no pueden subalternarse á las leyes comunes que esten en contradiccion con ellas.

Como en el ocurso se expresa que los CC. Diputados se retiraron del Salon despues de haber dado la hora de reglamento sin licencia, y por esta causa se les impuso la multa, si en efecto así ha sucedido, la proroga de la sesion no podría acordarse, como es de práctica constante, sin el número competente para ello, y por lo mismo en los puntos que hay necesidad de esclarecer, se presenta este como principal, pues

faltando el *quorum* fuera de la hora de reglamento, el acuerdo para imponer la multa constituye netamente la violacion de la garantía de que se quejan los CC. Diputados en cuyo nombre se presenta el ocurso.

Al que suscribe se le presenta además otra consideracion, que no cree fuera de lugar presentar á la del C. Juez, y consiste en la irregularidad palpable que se nota en cuanto al modo de hacer efectiva la multa, si esta se ha fundado en la ley de 13 de Junio de 1848, en cuyo artículo (10.) diez se determina que estas penas se harán efectivas *por medio del C. Juez de Distrito*, de manera que esta prevencion no puede tener otro objeto que oír al presunto reo en la defensa que pueda ejercitar y excusarlo de la culpabilidad presunta en el momento de haber faltado á la sesion ordinaria á que haya dejado de concurrir, y que se esclarezca judicialmente si esa culpabilidad es real ó no exista; pero siempre la imposicion de la pena, sustancialmente viene á hacerse conforme á esta ley por la autoridad judicial. Así es que, si este requisito no se ha llenado, es fuera de cuestion que tanto la Secretaría del Congreso librando la orden, como la comision de policía al cumplimentarla, han procedido sin sujetarse á las prescripciones del artículo diez de la citada ley de Junio de 1848, que en esta parte está enteramente conforme con el artículo 21 de la Constitucion, en cuanto á que solo la autoridad judicial es competente para imponer penas propiamente tales, y por consiguiente, la garantía consignada en este artículo está claramente violada.

Por estas razones, el suscrito Promotor cree que es de otorgarse el amparo que solicitan los CC. Diputados á quienes se ha castigado con la pena de que se quejan, por que ésta no se ha impuesto por la autoridad competente.

México, Mayo nueve de mil ochocientos setenta y uno. (Firmado.) *Francisco G. Moctezuma.*

Sentencia del Juez de Distrito.

México, Mayo 18 de 1871.

Visto el presente juicio de amparo interpuesto por los CC. Licenciados Juan Sanchez Azcona y Gabriel M. Islas en nombre de varios diputados al Congreso General á virtud de reputar violadas en la persona de sus representados las garantías que otorga el artículo 21 de la Constitución, con la multa que les fué impuesta en la sesion del día 24 de Marzo último; visto el informe que á los CC. diputados Ramon Guzman, Angel Lerdo de Tejada y Vicente Villada les fué pedido como inmediatos ejecutores del acto en que se hace consistir la violacion; el auto en que para mejor proveer y á causa de la contestacion de los espresados Guzman, Lerdo de Tejada y Villada se mandó pedir informe á la secretaria del congreso; lo pedido por la parte fiscal, y visto en fin lo que debia: atendiendo á que la violacion de garantías individuales y por consiguiente el derecho á otorgarse el amparo que se solicita se hace consistir en que habiéndose separado los quejosos del salon del Congreso en la sesion del citado dia despues de la hora de reglamento, la imposicion de multa y ejecucion de ella, ya se reputa pena propiamente tal ó con carácter de correccion, es un hecho que importa la transgresion al artículo constitucional que establece la garantía de que las penas ó correccion solo sean impuestas por la autoridad que para ello designa: y considerando:

Primero. Que aun cuando por leyes especiales ó secundarias, aun por el reglamento del Congreso general se designase por atribuciones de éste la de imponer penas como la de que se trata, tales leyes ó reglamento no podrian tener observancia y aplicacion contra lo que el Código fundamental proviene, y mas si la prevencion constituye una garantía individual: que en consecuencia y para resolver con mayor acierto sobre si en el caso se ha efectuado ó no violacion de garantías con la imposicion de la

multa que origina la queja, hay que investigar previamente la existencia de la autoridad ó facultad que como requisito indispensable designa el artículo constitucional.

Segundo. Que en vista, tanto de la contestacion dada por los ciudadanos diputados á quienes como ejecutores del acto se pidió el informe, como de la acta de la sesion del día 24, cuya constancia corre á fojas 10, y de lo prevenido por los artículos 60 de la ley de 12 de Febrero de 1857, y 5 y 10 de la de 13 de Junio de 1848, resulta legalmente comprobado, no solo que faltó el acatamiento á las disposiciones constitucionales (artículos 21 y 64,) y aun la observancia de las leyes secundarias que pudiesen llamarse de la materia, sino además, que no habiendo habido en el acto de la determinacion de la pena, el número suficiente de diputados que para formar *quorum* requiere el artículo 61, no puede decirse ejercian autoridad alguna, puesto que las simples juntas ó reuniones de dos, tres ó mas ciudadanos diputados que no lleguen á la mitad de su número total y fuera de los casos que la misma Constitución determina y clasifica, como son los de juntas preparatorias para la instalacion del Congreso y diputaciones permanentes, carecen de atribuciones propias ó inherentes á la autoridad ó poder, y esto sin que á ello se oponga la inteligencia del repetido art. 61, porque él se refiere precisamente al caso de juntas preparatorias como gramaticalmente lo indican los términos y palabras de que usa.

Considerando por último: que si bien no se ha rendido en el presente juicio el informe que por auto de 28 del pasado se pidió á la secretaria del Congreso, prescindiendo de toda otra calificación y concretándose solo al hecho en sí, que por lo menos debe entenderse como renuncia de la facultad de informar, hay que apreciar ésta en perjuicio de la autoridad responsable ó ejecutora del acto y favorablemente á los derechos del quejoso, pues de otra suerte y

supuesto lo prevenido en el art. 24 de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869 y la resolución que para la falta de informe tiene dictada la Suprema Corte de Justicia, sería contrariar el espíritu de la ley y enervar los procedimientos en los juicios de amparo, convirtiendo en ilusoria su institución, porque el no rendir informe sería el medio de que las autoridades responsables harían uso para la impunidad de sus actos y para impedir los efectos de la ley.

Por tales consideraciones, pues, y de conformidad con lo pedido por el ministerio Fiscal, se declara: que la Justicia de la Unión ampara y protege á los CC. diputados al Congreso general que han promovido el presente juicio, por haberse violado en sus personas con la imposición y ejecución de la multa á que se refiere la queja, la garantía individual que otorga la Constitución en su art. 21. Hágase saber; y con arreglo á los artículos 18 y 27 de la ley orgánica, publíquese en el *Diario Oficial* del Supremo Gobierno y remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revisión. Lo decretó y firmó el C. Lic. José M.^a Canalizo, Juez 2.^o de Distrito. Doy fe.—*José M. Canalizo.*—*Inocencio Santalla, secretario.*»

*Ejecutoria de la Suprema Corte
de Justicia.*

México, Mayo veintitres de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el 2.^o Juzgado de Distrito de esta ciudad, por los CC. diputados al Congreso de la Unión, Juan Sanchez Azcona, Gabriel M.^a Islas, el segundo de ellos por sí y ambos en representación de los CC. diputados, Carlos Andrade, Fernando Andrade, M. M. Arévalo, Juan Avendaño, José Valente Baz, Juan J. Baz, Eugenio Barreiro, Francisco Verduzco, Guadalupe Calvillo, Ma-

tías Cámara, Manuel Castellanos, Agustín Castañeda, José María Castro, Ignacio Cebado, José María Celaya, José María Condés de la Torre, Rafael Domínguez, José Fernández, Ramon Fernandez, José María Galvan, Juan García Brito, Francisco García López, Luis J. Gomez, M. E. Goitia, J. M. Gil, Hilipólito Herrera, Rafael Herrera, R. Iljar y Haro, Agustín López de Nava, Gabriel Mancera, Manuel Mancilla, Gregorio Perez Jardon, Guillermo Prieto, O. Ramos, R. Ramirez, R. Rodríguez, Manuel Rojo, J. Romero, M. Rojas y Montoya, E. Sanchez, P. Santalla, E. Serrano, A. Tápia, J. Urbina, I. L. Ballarta, Francisco Zéroga, contra la disposición de una junta de Diputados, que les impuso una multa el 24 de Marzo del presente año, por haberse separado los quejosos del salón de sesiones del Congreso, antes de la hora señalada para que terminasen ese día las sesiones, y Considerando: Que la junta que impuso la multa no procedió en los términos que dispone el artículo 60 de la ley electoral de 12 de Febrero de 1857, único caso en que la imposición de dicha multa cabría en la prevención de la 2.^a parte del artículo 21 de la Constitución general, el cual por lo mismo ha sido infringido. Se decreta: que se confirma el auto pronunciado el 1.^o de Mayo del presente año, por el Juzgado 2.^o de Distrito de esta ciudad, que declara: que la justicia de la Unión ampara y protege á los CC. diputados al Congreso general que han promovido el presente juicio, por haberse violado en sus personas con la imposición y ejecución de la multa á que se refiere la queja, la garantía individual que otorga la Constitución en su artículo 21.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos CC. Presidente y Ministros que forma-

ron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Sebastian Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*L. Guzman.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Mayo veintinueve de mil ochocientos setenta y uno.—*Inc. Agustín Peralta*, oficial mayor.

CRIMINAL.

Causa seguida en el Juzgado de Distrito de Guanajuato, contra Félix Ramírez y socios por robo de parte del archivo del Tribunal de Circuito de Celaya.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que el cuerpo de delito del robo de una parte del archivo del Tribunal de Circuito, que residía en Celaya, está justificado plenamente por la confesion de los acusados, la existencia de los expedientes robados y la fé que el Juzgado tiene dada de ellos en el lugar correspondiente.

De la causa, aparecen dos reos como perpetradores principales del robo, y dos como receptadores.

Félix Ramírez, á quien debe considerarse como autor principal, iniciador y perpetrador del delito, ha confesado, que en su calidad de doméstico de la casa del Magistrado suplente de Circuito, tuvo ocasion, no de concebir el robo, sino la oportunidad de realizarlo; á este efecto ha pretendido, que la idea de verificar la extraccion de los papeles, le fué sugerida por su cómplice Jesus Gazca. Entre la afirmacion del uno

y la negativa del otro, difícil debe ser á la justicia decidir, si Ramirez fué instigado por Gazca, ó aquel solo fué quien concibió el delito.

No parece fuera del caso fijar la atencion, en que Ramirez, al dividir con Gazca la utilidad que debía producirle y le produjo el papel robado, tiene que haberlo hecho impulsado por algun motivo que lo obligara á aquello; de otra manera, era prudente creer que Ramirez se hubiera aprovechado solo del precio del papel, y bascando con quien dividirlo, á la vez que su utilidad fuera menor se hacia sin causa alguna, de un testigo de su delito. La causa de este modo de obrar, es probable que no sea otra, sino la instigacion ó el consejo que Ramirez recibió de Gazca, circunstancia que necesariamente los hizo cómplices y puso al uno en la necesidad de dividir el robo con el otro.

Jesus Gazca no ha confesado que sea él quien aconsejara y diera la idea á Ramirez de perpetrar el robo; sin embargo, ya esta promotoria fiscal ha manifestado las razones en que se funda para presumir este hecho fundado y dario por cierto.

Uno y otro de los acusados están conformes en haberse hecho de los papeles robados, en que los fueron á vender á las tiendas de Serna y de Solórzano, y en que se aprovecharon del precio que les dieron por ellos.

Donaciano Tovar y Francisco Serna, que figuran como receptadores, tienen en su contra la presuncion de que compraron el papel en la inteligencia de que era útil, procedente de una oficina, y por consecuencia debieron inferir que era robado. Se funda esta presuncion en el hecho, como consta de autos, de que los papeles iban formando expedientes cosidos, y liados éstos en bultos con el cuidado que no es costumbre hacerlo con los papeles inservibles, que se destinan á una venta tan baja como la que se hace por peso.